

CONCEPTOS

PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL DELITO

ISSN: 0717-330X

Nº 22, Marzo 1999

TIEMPOS VIOLENTOS: MENOS DELITOS, MÁS DELINCUENTES

Artículo por Timothy Egan, «The New York Times», página editorial, 7 de marzo de 1999.

Original (en inglés) disponible en el Centro de Documentación de la Fundación Paz Ciudadana.

Traducción, edición y síntesis: Francisco José Folch y Trinidad Puig.

El Gobierno de los Estados Unidos está pronto a exhibir nuevas cifras acerca de cuántos estadounidenses se encuentran privados de libertad. Ellas revelarán que el mercado carcelario todavía está creciendo: el Departamento de Justicia anunciará que uno de cada 150 habitantes de este país está tras las rejas, una tasa que ninguna otra democracia se acerca a igualar.

Así, en poco tiempo, el total de personas recluidas en prisiones estatales y federales alcanza a los dos millones, casi el doble de hace una década y, dado que el número de encarcelados crece año a año, bien se podría copar varios estadios.

Para un recién nacido norteamericano, la posibilidad de vivir alguna parte de su vida encerrado o en un campo correccional es una entre veinte; y, para los negros, una entre cuatro.

La mayoría de los expertos falló y no supo predecir que la población de reclusos se triplicaría desde 1980; y ahora nadie parece saber cómo detener la explosión. Según la lógica, las cárceles deberían disponer hoy de unas cuantas vacantes, y el costo de arrestos, persecuciones y reclusión de delincuentes debería decrecer. Después de todo, la economía difícilmente podría estar mejor, y los delitos han disminuido poco a poco en los últimos seis años. Sin embargo, un balance carcelario favorable está lejos de verse.

En cambio, cunde el juego de adivinanzas: ¿En qué punto el sistema penal más grande del mundo llegará a su saturación? ¿Dos y medio millones de internos? ¿Tres millones? Por cierto, si el número de delitos continúa en descenso, el número de nuevos presos también debería bajar. Pero no por completo. Porque,

sin importar cuán «en picada» caiga la criminalidad, los Estados Unidos tendrán que agregar, cada semana, el equivalente a una nueva cárcel con mil camas, probablemente, por otra década. Los funcionarios federales pronostican que el *boom* carcelario podría ser permanente, por lo menos por otra generación.

Una gran razón de lo anterior es que muchos de los nuevos internos son delincuentes drogadictos. En el sistema federal, cerca del 60 por ciento de todos los presos pasa una temporada recluido por delitos relacionados con drogas; en cárceles locales y estatales, esa cifra alcanza un 22 por ciento. Estos indicadores triplican la tasa de hace 15 años.

Los estadounidenses no consumen más drogas, en promedio, que otros países, pero esta nación —caso virtualmente único entre las democracias occidentales— ha escogido el camino del encarcelamiento para sus delincuentes drogadictos. Más de 400 mil personas están privadas de libertad por delitos relacionados con drogas, y cerca de un tercio de ellas está recluida sólo por poseer una

sustancia ilícita.

Barry McCaffrey, el «zar» nacional de la droga, denomina a esa masa en crecimiento de reclusos drogadictos como “el gulag interno de Norteamérica”. Si bien muchos de estos presos han cometido algún número de delitos, un grupo creciente de ellos no ha violado ninguna ley aparte que las relacionadas con el abuso de drogas.

En la década de 1980, el Congreso y los estados aprobaron leyes que ordenaban a los jueces enviar personas a la cárcel, incluso si se trataba de delincuentes primerizos o aprehendidos portando una pequeña cantidad de alguna sustancia ilícita. Las sentencias obligatorias mínimas como se las denomina, no dejan cabida para que el juez considere circunstancias especiales u otras opciones, como tratamiento en vez de cárcel.

La idea era que más arrestos conducirían a más condenas, que pondrían a más gente en la cárcel, con lo cual la tasa delictiva bajaría. Cosa que ocurrió.

Otro dividendo que se esperaba de esta política era suponer que habría una caída en el consumo de droga, lo que no sucedió. Según el FBI, los arrestos de consumidores subieron durante ese período.

Al mismo tiempo, el consumo de droga ha aumentado entre los jóvenes, especialmente heroína y metaanfetaminas. En general, el consumo no ha cambiado en los diez últimos años. En lo que se refiere a todos los demás delitos, las cifras son asombrosas, con enormes caídas en asesinatos, robos y asaltos.

El que esto se deba a que los EE.UU. pronto llegarán a tener dos millones de reclusos, es un tema de intenso debate.

Sin embargo, muchas autoridades que argumentan que el boom carcelario ha “sacado de circulación” a los peores delincuentes - lo cual sería el gran factor para la reducción de la delincuencia-, no tienen explicación que dé cuenta de las cifras de consumo de droga.

“Estoy de acuerdo con el Gobierno Federal en cuanto a que cese la guerra declarada a las drogas”, afirmó Morgan Reynolds, director del Centro de Justicia Criminal de la filial para Dallas del Centro Nacional de Análisis de Políticas (un *think tank* del libre mercado). El se autoclasifica en una postura «conservadora» en el debate sobre cárceles y delitos, y estima que la baja en los delitos puede ser directamente atribuida al boom carcelario. Pese a esto, está menos seguro de que la guerra a las drogas declarada por el Gobierno Federal tenga efecto sobre los índices delictivos y el consumo de drogas.

Para los liberales y libertarios, que han denunciado largamente que ese encarcelamiento ha fallado en conseguir otra cosa que engrosar la cuenta de la guerra contra las drogas, ese respaldo conservador es bienvenido. En tanto, Barney Frank, representante demócrata de Massachusetts, presentó un proyecto de ley destinado a restaurar la discrecionalidad de los jueces para dictar sentencias respecto de delincuentes drogadictos de menor gravedad y no violentos.

A juicio de Marc Mauer, direc-

tor asistente del «Proyecto Sentencias» -un grupo sin fines de lucro que ha sido crítico respecto de la construcción de cárceles-, se está llegando al punto de disminución de los beneficios. “Mientras más se expanda el sistema carcelario, tanto más ‘peces chicos’ que encerrar”.

Incluso los arquitectos de las políticas punitivas contra las drogas argumentan que llenar las cárceles con aún más delincuentes drogadictos no es una inversión sensata. Edwin Meese, quien se desempeñó como procurador general del ex Presidente Reagan -período en el que la mayoría de las leyes sobre drogas fueron reformuladas-, ha empezado a mirar favorablemente los tratamientos para delincuentes de bajo nivel, en vez de enviarlos a la cárcel. “Pienso que las sentencias obligatorias mínimas para delincuentes drogadictos deben ser revisadas -ha planteado-, pues debemos saber quién ha sido encarcelado y qué ha resultado de ello”.

Más allá de las leyes que envían a los delincuentes drogadictos a la cárcel con certeza reflexiva, existen ahora incentivos institucionales para mantener presa a más gente, una inclinación que algunos llaman “complejo industrial carcelario”.

El precio de las acciones de la Corporación de Correcciones de América (CCA), la empresa de cárceles privadas más grande de Estados Unidos, se ha decuplicado desde 1994. El capital de la compañía es ahora privado. Sin embargo, CCA ha creado un fondo popular de inversión inmobiliaria para obtener beneficios de todas aquellas prisiones nuevas que se están construyendo a razón de una por semana.

Entretanto, los sindicatos que representan a los guardias carcelarios se han transformado en las asociaciones de empleados públicos con el más rápido crecimiento en varios estados. En California, el año pasado, esa entidad obtuvo un alza salarial de 12%, lo que significó que el salario de un guardia carcelario experimentado alcanzara los 51.000 dólares.

Las cárceles en California, como virtualmente en cualquier otro estado, están ocupadas casi al máximo de su capacidad, pese a que allí se han construido 21 nuevos recintos en los últimos 15 años. Pronto costará alrededor de cuatro mil millones de dólares anuales mantener el sistema de prisiones del estado. Si la legislatura debe proponer algún cambio en la ley que haga decrecer el aumento de las cárceles, se escucharán clamores de denuncia desde los grupos que se han beneficiado con el crecimiento de estos recintos.

“Cuando uno tiene una sociedad proclive a construir y mantener más cárceles, resulta muy difícil cerrarlas”, señala Mauer. “Particularmente, en áreas rurales que pasan a depender de ellas, es como tratar de cerrar una base militar”.

En ocasiones, es la escasa comunidad rural la que rechaza el establecimiento de una nueva prisión en «su patio trasero», dada la perspectiva de empleos gubernamentales permanentes, bien remunerados y acompañados por numerosos beneficios complementarios.

El factor que en última instancia puede retardar el crecimiento carcelario, según Allen J. Beck, esta-

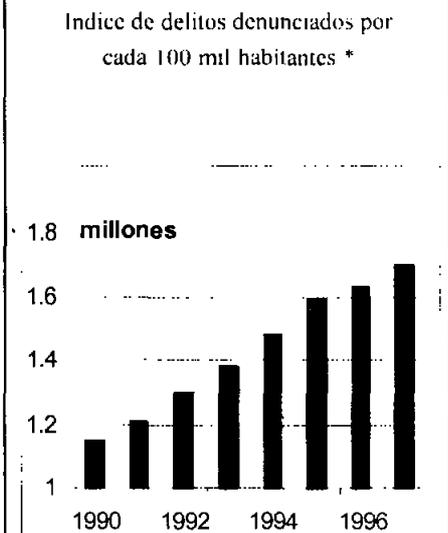
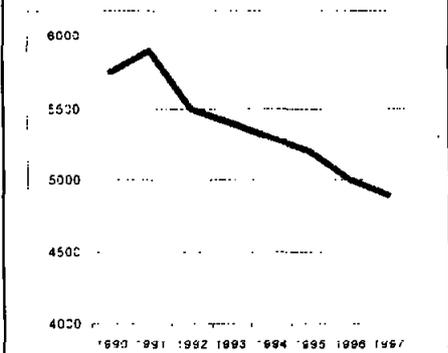
dístico jefe del Departamento de Justicia, experto en problemas de justicia criminal, son los intereses presupuestarios. “A los contribuyentes les cuesta 20.000 dólares al año mantener y alimentar cada nuevo interno, lo cual no incluye el costo de construcción de nuevas prisiones. Los estados gastan casi 30 mil millones de dólares en mantener a la gente en prisión, esto es, cerca del doble de la tasa de hace diez años”.

Dado este panorama, algunos estados comienzan a desanimarse. Los legisladores líderes de California afirman que no van a construir nuevas cárceles en los próximos años. Sin embargo, no han explicado qué van a hacer con el excedente de presos. En el estado de Washington, un proyecto de ley que suprime las condenas mínimas obligatorias para delincuentes drogadictos ha ganado apoyo de jueces, fiscales y republicanos expertos en delincuencia. Este fue un estado pionero en decretar leyes que requieren un encierro prolongado, sin posibilidad de libertad anticipada o autorización a los jueces para considerar otras opciones. No obstante, las prisiones son ahora el ítem que crece más rápido en el presupuesto del estado, aun cuando la delincuencia haya estado cerca de llegar a sus niveles mínimos.

Sin duda, será difícil cambiar la tendencia, con el crecimiento de nuevas cárceles en áreas rurales deprimidas. Un aseo general luego de la «cruzada», según dijeron algunos legisladores, ha probado ser más difícil de lo que anticiparon.

A Punto de Reventar

Pese a una sostenida caída en la tasa de delitos, la población carcelaria continúa subiendo, en parte por el aumento de condenados por drogas, que no se incluyen en el índice delictivo del FBI.



Población de prisiones federales, estatales y locales

*Asesinato / homicidio, violación, asalto, asalto calificado, robo, hurto, robo de vehículos.

Fuente: Oficina de Estadísticas de Justicia, FBI (Edición 1997 de "Delincuencia en los EE.UU.")

PAZ CIUDADANA

1. Directorio

Presidente: Agustín E. Edwards E.

Vicepresidente y Secretario:
Sergio Bitar Ch.

Vicepresidente y Tesorero:
Bernardo Matte L.

Directores: José Joaquín Brunner R.
Carlos F. Cáceres C.
Mónica Jiménez de la J.
Edmundo Pérez Y.

2. Asesores del Directorio

José Gabriel Aldea S.
Ernesto Corona B.
Carlos A. Delano A.
Roberto Edwards E.
Francisco José Folch V.
Gonzalo García B.
M^a Pía Guzmán M.
Rodrigo Jordán F.
Guillermo Luksic C.
Roberto Méndez T.
Martín Subercaseaux S.

3. Consejo Consultivo

Ramón Aboitiz M.
Pilar Armanet A.
Julio Barriga S.
Enrique Barros B.
Edgardo Böeninger K.
Francisco Bulnes S.
José Claro V.
Enrique Correa R.
Francisco Gana E.
José Antonio Garcés S.
Claudio García S.
Oscar G. Garretón P.
José Antonio Guzmán M.
Edmundo Hermosilla H.
Gonzalo Ibáñez L.
Alberto Kassis S.
Mauricio Larraín G.
Alan Mackenzie H.
Germán Molina M.
Juan Pablo Morgan R.
Laura Novoa V.
Juan Obach G.
Máximo Pacheco G.
Bernardino Piñera G.
Adolfo Rojas G.
Jaime Santa Cruz L.
Agustín Squella N.
Eugenio Tironi B.
Patricio Valdés P.
Gonzalo Vial C.
Luis Enrique Varur R.

4. Asesor Jurídico

Enrique Montero M.

5. Gerente General

Carlos Valdivieso A.

Domicilio : Valenzuela Castillo 1881
Teléfono : (56-2) 2748488
Fax : (56-2) 2748361
E-Mail : fpc@ncup.cl